



**Asunto: Propuesta de inclusión de diversos artículos en la Ley de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2024, con la finalidad de mejorar la agilidad en la gestión de los fondos europeos.**

Con finalidad de mejorar la agilidad en la gestión de fondos europeos, se proponen una serie de medidas a incluir en la Ley de medidas fiscales y administrativas de la CAR para el año 2024.

**1. Tramitación de urgencia de los procedimientos administrativos de ejecución de gastos con cargo a fondos europeos provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación.**

**Artículo XX. Tramitación de urgencia de los procedimientos administrativos de ejecución de gastos con cargo a fondos europeos provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación.**

1. Se declara la aplicación de la tramitación de urgencia y el despacho prioritario, en los términos previstos en los artículos 33 y 71 respectivamente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de los procedimientos administrativos que impliquen la ejecución de gastos con cargo a los fondos europeos provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación, sin necesidad de que el órgano administrativo motive dicha urgencia en el correspondiente acuerdo de inicio.
2. Lo establecido en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de la necesidad de que, de conformidad con la normativa europea, la declaración de urgencia de los contratos públicos requiera de una motivación para cada contrato atendiendo a las circunstancias concurrentes.
3. La función interventora en estos expedientes gozará de prioridad respecto de cualquier otro, debiendo pronunciarse el órgano de control en el plazo máximo de cinco días.

**Justificación.**

Se trata de establecer con una norma general de tramitación de urgencia y reducir el plazo de función interventora en línea con normativa de otras CCAA (en el caso de la función interventora, la normativa Navarra).

La norma general no puede establecerse para contratos públicos. En ese caso, será necesaria una justificación para cada contrato. En este sentido, a Instrucción de 11 de marzo de 2021, de la JCCA del Estado, sobre la tramitación de urgencia en los procedimientos de licitación de los contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del PRTR, cuya argumentación se transcribe:

“1. La tramitación de urgencia en los procedimientos de selección del contratista que se sigan en los contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La exposición de motivos del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia nos recuerda que el Consejo Europeo del 21 de julio de 2020 acordó que la Unión Europea enfrentase mediante medidas concretas el esfuerzo sin precedentes necesario para impulsar, ante la gravísima situación sanitaria, social y económica causada por la pandemia originada por el COVID-19, la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea. Tales medidas se concretan en el denominado Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU») que, bajo determinadas condiciones, implicará para España una notable inyección de fondos en forma de transferencias y préstamos para el periodo 2021-2026. Es evidente que una de las fórmulas de mayor impacto a través de la cual las

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 1 / 7
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2023/126310	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2023/0866168
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Directora General de Fondos y Relaciones con la Unión Europea			
2			

entidades públicas beneficiarias de los fondos europeos van a poder hacer efectivas las actividades financiadas con aquellos es la de los contratos públicos. Ante esta circunstancia, no es de extrañar que haya sido necesario regular ciertos aspectos relacionados con la licitación de los contratos financiados de este modo, especialmente con el fin de aplicar ágilmente los fondos europeos. Tal regulación se contiene en el Real Decreto-Ley antes mencionado, especialmente en su artículo 50, precepto básico conforme a la disposición final primera del Real Decreto-Ley cuya interpretación se considera conveniente aclarar y precisar por parte de la Junta Consultiva en lo que se refiere a los aspectos puramente adjetivos y procedimentales y también a la razón de fondo del precepto. 2. La justificación de la medida adoptada. La grave situación ocasionada por el COVID-19 ha tenido un significativo impacto económico en España, al igual que en otros países de nuestro entorno. Esta coyuntura es, sin duda, excepcional en muchos aspectos y, por esta razón, es lógico que las medidas que se hayan de adoptar por los Estados revistan una pátina de prioridad y celeridad que obliga a establecer ciertas normas específicas para instrumentarlas. En los contratos públicos tales medidas han tenido una notabilísima incidencia en diferentes normas en los aspectos más cercanos al combate contra la pandemia y esta Junta Consultiva ha tenido la ocasión de pronunciarse en múltiples ocasiones sobre ellas en el último año. La recuperación económica se torna en este momento en una necesidad de gran trascendencia. Dicha recuperación debe ser prioritaria y lo más rápida posible, razón por la cual la contratación pública no debe quedarse atrás en la adaptación de su regulación a los principios de prioridad y celeridad, al tratarse de un mecanismo de gran trascendencia para la ejecución de las medidas que se juzguen oportunas en el proceso de relanzamiento de la economía en todos sus aspectos. La citada adaptación normativa responde, por tanto, a una situación especial, situación que admite que el legislador pueda perfilar una regulación que facilite en lo posible la tramitación rápida y eficaz de los contratos públicos financiados con el Fondo. No otra es la opinión que el propio legislador manifiesta en la exposición de motivos del Real Decreto-Ley 36/2020 (epígrafe XII) donde alude a las especialidades en materia de contratación administrativa (ubicadas en el Capítulo III del Título IV) cuando indica que “se dispone que a todos los contratos financiados con los Fondos percibidos por el Reino de España en el marco del plan de recuperación les sea de aplicación el régimen excepcional de tramitación urgente, con la consiguiente reducción de plazos y agilización del procedimiento.” No obstante, esta exposición sin valor normativo debe ser interpretada con arreglo a lo previsto en el articulado, en el cual el legislador, lejos de establecer una habilitación ex lege para utilizar la tramitación de urgencia en relación con todos los contratos financiados con los fondos procedentes del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, introduce unas condiciones muy precisas cuya interpretación es objeto de esta Instrucción. En efecto, la norma objeto de esta Instrucción (artículo 50.1) señala lo siguiente: “Al licitar los contratos y acuerdos marco que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los órganos de contratación deberán examinar si la situación de urgencia impide la tramitación ordinaria de los procedimientos de licitación, procediendo aplicar la tramitación urgente del expediente prevista en el artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.” La norma precisa la necesidad de que el órgano de contratación analice si existe una característica y significada situación de urgencia respecto del contrato público en cuestión y si esta situación impide de facto la tramitación ordinaria del procedimiento por la vía común. Hay que aclarar que la imposibilidad a la que alude la norma se refiere también a que la tramitación sujeta a los plazos ordinarios haga estéril la celebración del contrato. Este examen debe realizarse por el órgano de contratación en cada uno de los procedimientos que se vayan a financiar con los Fondos a que venimos aludiendo. La imposibilidad de declarar ex lege la aplicación de la tramitación de urgencia a todos los contratos financiados con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es consecuencia de la normativa comunitaria sobre la materia, la cual actúa como parámetro a los efectos de valorar la correcta aplicación de los fondos concedidos a cada Estado miembro. En efecto, con ocasión de las dudas surgidas a los Estados miembros acerca de esta cuestión, la Comisión Europea emitió el 19 de noviembre de 2020 una nota aclaratoria denominada “Projects financed from recovery funds:

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 2 / 7
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2023/126310	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2023/0866168
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Directora General de Fondos y Relaciones con la Unión Europea			
2			

shortening of time limits in public procurement procedures.<sup>1</sup> En esta nota la Comisión nos recuerda que, conforme a las Directivas en materia de contratación pública, existen dos posibilidades para tramitar los contratos públicos sujetos a una situación de urgencia:

- Aquellos que obedecen a una situación de extrema urgencia, en los que los plazos y aun los requisitos procedimentales no pueden ser cumplidos. Esta situación debe responder a circunstancias imprevisibles y no atribuibles a la responsabilidad de órgano de contratación. Es lo que en nuestro derecho se conoce como tramitación de emergencia (artículo 120 LCSP), que se empleó con éxito para hacer frente a la pandemia en los aspectos sanitarios más urgentes propiamente dichos; y también se concreta en el procedimiento negociado sin publicidad por razón de imperiosa urgencia (artículo 168.b) 1º LCSP). 1 Proyectos financiados con los Fondos de Recuperación: Acortamiento de los plazos en los procedimientos de los contratos públicos.
- Aquellos en los que procede la tramitación de un procedimiento acelerado cuando exista una situación de urgencia, que convierta a los plazos ordinarios en impracticables y que sea debidamente justificada en el anuncio de licitación. Esta figura responde con precisión a lo que en nuestra tradición jurídica se conoce como tramitación de urgencia y que actualmente se regula en el artículo 119 de la LCSP. Centrándose en esta última figura, la Comisión recuerda que, aunque la necesidad de actuar y ejecutar con rapidez los contratos financiados por el fondo puede ser entendida como una situación de urgencia, y aunque esta presunción puede aplicarse a estos contratos, las Directivas solo autorizan el uso del procedimiento acelerado como una excepción. Ello impide que se puedan fijar normativamente plazos acortados a todos los contratos públicos, estén o no relacionados con los fondos de que tratamos. Aunque pueda justificarse una urgencia general en la necesidad de actuar con rapidez en la recuperación económica, la Comisión considera que el recurso a la tramitación de urgencia únicamente cabe en los casos en que los plazos ordinarios sean realmente impracticables para tramitar el procedimiento, y todo ello amparándose en la eventual merma de la competencia que ello puede suponer, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas, en el obligado respeto de los principios de concurrencia, transparencia, igualdad de trato y no discriminación y en la necesidad de salvaguardar los acuerdos de la UE en materia de gobernanza en la contratación pública.

En resumen, el criterio de la Comisión Europea se puede explicar en tres ideas: • La aplicación de la tramitación de urgencia se configura como excepcional, y no cabe de forma generalizada o automática. Por ello es menester que el órgano de contratación valore, caso por caso, las circunstancias que podrían exigir una tramitación más rápida frente a los riesgos de limitar la competencia o infringir los principios básicos del Tratado, dados los eventuales efectos perjudiciales sobre la competencia de la reducción de plazos

- Resulta necesario justificar la situación de urgencia por parte de la entidad contratante, de modo que solo cabe aplicar la tramitación de urgencia en los casos en los que los plazos establecidos sean realmente impracticables, debiéndose dejar constancia de la justificación en el expediente y publicar tal circunstancia en el anuncio de licitación del contrato.

- En todo caso es imprescindible respetar las exigencias de los principios de no discriminación, igualdad de trato y proporcionalidad, intentando alcanzar el mayor grado de transparencia posible. Consecuentemente, los órganos de contratación han de incluir una adecuada justificación, caso por caso, de la situación de urgencia en el anuncio del contrato”.

## 2. Contratación conjunta de proyecto y obra

### Artículo XX. Contratación conjunta del proyecto y la obra.

1. Además de en los supuestos previstos en la normativa estatal, excepcionalmente para los contratos financiados con alguno de los fondos incluidos en el artículo 2.2 del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 3 / 7
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2023/126310	Informe	Solicitudes y remisiones generales		2023/0866168
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Directora General de Fondos y Relaciones con la Unión Europea				
2				

diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se podrá efectuar la contratación conjunta de la elaboración de proyecto y ejecución de obras, salvo que se trate de obras cuya correcta ejecución exija el cumplimiento de unos requisitos de solvencia o, en su caso, clasificación, que no sea posible determinar antes de obtener el correspondiente proyecto

2. En tal caso, se requerirá la redacción previa por la Administración o entidad contratante de un anteproyecto o documento similar, en el que se cuantifique el valor estimado de la actuación a ejecutar. A ese valor estimado se sumará, según el valor de mercado de este tipo de actuaciones, la parte correspondiente a la redacción de proyecto.

3. La gestión presupuestaria de estos expedientes se regirá por las normas generales, procediéndose a aprobar el gasto por el presupuesto base de licitación (IVA incluido).

### Justificación

La regulación de la contratación conjunta de proyecto y obra se encuentra en el artículo 234 LCSP que no tienen carácter básico. En relación a la ejecución de fondos europeos, el Estado ha previsto esta posibilidad en la nueva redacción del artículo 52 bis del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que indica lo siguiente:

“Además de en los supuestos previstos en el artículo 234.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, se permitirá con carácter excepcional la contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras cuando el contrato se vaya a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, salvo que se trate de obras cuya correcta ejecución exija el cumplimiento de unos requisitos de solvencia o, en su caso, clasificación, que no sea posible determinar antes de obtener el correspondiente proyecto. En todo caso, el órgano de contratación deberá indicar en el expediente los motivos que, con independencia de la forma de financiación de la actuación, justifican llevar a cabo una contratación conjunta. Se deberá garantizar, en todo caso, que las actuaciones cumplen con los principios horizontales y mecanismos de control del Plan”.

Con la redacción propuesta se pretende aclarar la aplicación de esta posibilidad a otros fondos regulados en el Real Decreto Ley 36/2020 (especialmente FEDER), así como establecer una mínima regulación de la gestión presupuestaria de manera que no se aplique supletoriamente lo previsto en el artículo 234 LCSP a la gestión presupuestaria.

Castilla la Mancha ha incluido esta posibilidad en la Ley 4/2021 (art. 23). Debe destacarse la posibilidad de emplear esta figura en diversos contratos vinculados a la eficiencia energética (instalación e fotovoltaica, etc.), en los que en la práctica las empresas instaladoras desarrollan el propio proyecto.

### **3. Modificación de contratos**

#### **Artículo XX. Modificaciones de contratos.**

A los efectos de la modificación de los contratos prevista en el artículo 205.2.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para los contratos financiados con alguno de los fondos incluidos en el artículo 2.2 del Real

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 4 / 7
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2023/126310	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2023/0866168
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Directora General de Fondos y Relaciones con la Unión Europea			
2			

Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se considerarán circunstancias sobrevenidas imprevisibles las modificaciones de la programación europea vigente que tengan incidencia sobre el objeto del contrato. Las modificaciones que se acuerden deberán, en todo caso, asegurar el mantenimiento del equilibrio económico del contrato.

#### Justificación:

Dada la posibilidad de que a través de adendas se establezcan modificaciones en los plazos referidos al cumplimiento de hitos y objetivos fijados en el CID, y la propia configuración del hito y objetivo como un elemento esencial a incluir en los pliegos de cláusulas administrativas según la Instrucción de 23 de diciembre de la JCCA del Estado, sobre aspectos a incorporar en los expedientes y en los pliegos rectores de los contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del PRTR, se considera oportuno prever como un supuesto de imprevisibilidad este tipo de cambios.

La regulación está en línea con la regulación de la Ley 4/2021, de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para la gestión y ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación de Castilla La Mancha,

#### **4. Ampliación del plazo de ejecución y justificación de subvenciones**

##### **Artículo X. Ampliación del plazo de ejecución y justificación de subvenciones**

Para las subvenciones financiadas con alguno de los fondos incluidos en el artículo 2.2 del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, las modificaciones de la programación europea que tengan incidencia sobre el plazo de justificación de la subvención habilitarán para ampliar el plazo de ejecución de la misma, aunque esta posibilidad no se haya previsto en las bases reguladoras ni en la resolución de convocatoria.

#### Justificación:

En línea con el supuesto de modificación de contratos, se trata de una posible adaptación a los nuevos plazos de cumplimiento de hitos y objetivos derivados del CID teniendo amparo con norma con rango de Ley. Ello permitirá modificar el plazo de ejecución de la actividad subvencionada y al plazo de justificación de la subvención sin que sea necesario modificar bases o convocatoria, según proceda, empleando esta habilitación prevista ex lege.

#### **5. Subvenciones de alumbrado público**

##### **Artículo XX. Subvenciones de alumbrado público**

1. Sin necesidad de modificar las bases, la Resolución de convocatoria de las subvenciones reguladas en la [Orden SSG/27/2021, de 28 de mayo](#), por la que se establecen las bases reguladoras para la

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 5 / 7
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2023/126310	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2023/0866168
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Directora General de Fondos y Relaciones con la Unión Europea			
2			

concesión de subvenciones a los municipios para la ampliación o renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal podrá prever la financiación de las subvenciones con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, imponiendo las obligaciones derivadas de la aplicación del sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, reguladas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

2. Así mismo, y sin necesidad de modificar las bases reguladoras, la Resolución de convocatoria podrá prever que la ayuda ascienda al 100% del gasto subvencionable.
3. Para garantizar el cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa europea, así como la efectividad de la eficiencia energética de las medidas adoptadas, el Gobierno de La Rioja podrá proporcionar a las entidades locales, recomendaciones sobre medidas de alumbrado público a adoptar, modelos de pliegos u otro tipo de asistencia técnica.
4. Para garantizar que con la actuación se obtiene un 30% de ahorro energético, será necesario que el certificado aporte un certificado energético previo y otro posterior a la ejecución de la actuación que justifique el ahorro energético derivado de la actuación.

#### Justificación:

Las subvenciones reguladas en la [Orden SSG/27/2021, de 28 de mayo](#) prevén entre sus condiciones un ahorro en la renovación de alumbrado público del 30%, lo cual permite obtener una contribución del 100% al cambio climático según el campo O26 bis del Anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Considerando que del total del gasto de MRR, cerca del 40% debe dedicarse al cambio climático según el sistema de medición previsto en el referido Anexo VI, esta línea de subvención debe tratar de financiarse en alguno de los subproyectos que ejecuta esta comunidad Autónoma. En concreto, se ha previsto interesante vincularla a las líneas de turismo; en concreto a las Actuaciones de Cohesión donde se ha detectado que se habían previsto actuaciones incorrectamente etiquetadas y donde existe un posible incumplimiento en relación a la obligación de que el 40% del gasto público ejecutado contribuya al cambio climático, según el sistema de medición referenciado en el que se clasificación las actuaciones en actuaciones que contribuyen al 100% al cambio climático, al 40% o al 0%..

La referida orden de bases prevé un porcentaje del 70% de ayuda máxima. Con objeto de maximizar la ejecución de fondos y de garantizar la neutralidad del MRR en la contabilidad local, Interesa que se trate de una subvención al 100%, sin que sea necesario modificar las bases reguladoras.

Así mismo, la resolución de convocatoria podrá exigir por esta habilitación legal, el cumplimiento de los principios de gestión del PRTR regulados en la Orden HFP 1030/2021 (medidas antifraude y de conflicto de interés, etiquetado verde y digital, DNSH, comunicación, etc.)

#### **5. Grupos de trabajo interdisciplinares**

#### **Artículo XX. Grupos de trabajo interdisciplinares**

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 6 / 7
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2023/126310	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2023/0866168
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Directora General de Fondos y Relaciones con la Unión Europea			
2			

1. Cuando la gestión de fondos europeos lo requiera, se podrán constituir grupos de trabajo interdisciplinarios, del que forme parte personal de una o varias Consejerías.
2. La asistencia a las reuniones de los referidos grupos de trabajo será obligatoria, salvo debida justificación, y dará derecho a una indemnización por razón de servicio prevista para la asistencia a Tribunales de oposiciones y concursos.
3. La creación de los grupos de trabajo se requerirá acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda. En el Acuerdo de Consejo de Gobierno se fijará el límite máximo de asistencias para cada grupo.

**Justificación:**

Se trata de establecer la posibilidad de exigir un sobreesfuerzo a determinados empleados públicos y prever algún sistema de recompensa equiparado a los Tribunales de Concursos y Oposiciones. Se tramitaría como una dieta con retención de IRPF porque no sería una dieta exenta.

La indemnización por razón de servicio es el enfoque para asistencia a órganos colegiados de la Administración (art. 28 del RD 462/2002) del Estado y el art. 20 del Decreto 42/2000, de 28 de julio, sobre indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la CAR.

Si bien, la Ley (jerárquicamente superior al Decreto) prevé un sistema de creación del grupo de trabajo específico y una cuantía análoga a los tribunales de concursos y oposiciones, por emplearlo como referencia.

Aunque jurídicamente el grupo de trabajo no se configura propiamente como un órgano, tanto la asistencia al mismo como la cuantía a percibir por asistencia se puede considerar análoga desde la perspectiva jurídica y material, para equiparar ambos supuestos.

Así mismo, destacamos que la redacción permite exigir la presencia funcional fuera del horario de trabajo.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 7 / 7
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2023/126310	Informe	Solicitudes y remisiones generales		2023/0866168
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1	Directora General de Fondos y Relaciones con la Unión Europea			
2				